

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Eurelio de Jesús Álvarez Montoya
DEMANDADO	Colpensiones, Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez
PROCEDENCIA	Juzgado 13 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 013 2019 00248 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 070 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de invalidez de origen común – No acredita PCL igual o superior al 50%
DECISIÓN	Confirma absolución

En la fecha, **ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación formulado por el apoderado del señor **Eurelio de Jesús Álvarez Montoya**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promoviera este en contra de **Colpensiones**, y de las **Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez**. Radicado único nacional 05001 3105 **013 2019 00248** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 011**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

El demandante convocó a juicio a las accionadas pretendiendo se declare la nulidad de los dictámenes emitidos por Colpensiones, Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; en consecuencia, se establezca que cuenta con una PCL superior al 50% de origen común, estructurada el 07 de febrero de 2018, y con ello se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle pensión de invalidez, intereses moratorios o indexación y costas del proceso.

En sustento de ello afirma que, fue calificado el 25 de octubre de 2017, por Colpensiones con una PCL del 30,96% estructurada el 06 de octubre del mismo año, decisión frente a la cual no estuvo de acuerdo y presentó recurso, siendo valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 26 de febrero de 2018, asignándosele una PCL del 47,05% estructurada el 06 de octubre de 2017, apreciación que fue objeto de apelación, siendo desatado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el 19 de diciembre de 2018, confirmando el contenido del dictamen objeto de revisión. El 26 de enero de 2019, fue valorado por la IPS Universitaria, estableciéndole una PCL del 54,79% estructurada el 7 de febrero de 2018, evidenciándose con ello que los dictámenes anteriores no son coherentes con su estado de salud. Al contar con los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, solicitó la misma el 27 de febrero de 2019.

En auto del **22 de abril de 2019, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, una vez enteradas las demandadas de la existencia del proceso, procedieron a allegar contestación, así:

Colpensiones, admite el contenido del dictamen emitido por esa entidad, los de la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, y por el

médico de la IPS Universitaria, aclarando que este último no goza de validez. Así mismo acepta la reclamación de la pensión de invalidez, los demás supuestos no le constan. **Resistió las pretensiones**, formulando excepciones de mérito tendientes a enérvalas, tales como, inexistencia de la obligación por ausencia de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas, inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora e indexación, compensación indexada, y, la innominada.

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, acepta el tenor de los dictámenes emitidos por Colpensiones, la Junta Regional y la entidad, los demás supuestos no son ciertos o no le constan. **Se atiene a lo que se declare probado dentro del proceso**, no obstante, manifiesta en su defensa que la decisión emitida se encuentra soportada en la real condición que presentaba el paciente para el momento de la calificación, consignada en la historia clínica, las pruebas diagnósticas y la valoración efectuada, bajo los lineamientos del Decreto 1507 de 2014 (Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional), y en cuanto al procedimiento con el Decreto 1352 de 2013, unificado por el 1072 de 2015. Por último, presentó como excepciones de mérito las que denominó: revisión de la calificación, legalidad de la calificación emitida, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen – carga de la prueba en cabeza del contradictor, improcedencia de las pretensiones respecto a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez – competencia juez laboral, buena fe y, la genérica.

Mediante proveído del 21 de octubre de 2021, se dio por no contestada la demanda por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de febrero de 2023, en la que

absolvió a Colpensiones y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez de las pretensiones incoadas en su contra, imponiendo costas en contra del actor y en favor de las demandadas, fijando el monto de las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000,00 correspondiéndole \$386.666,00 a cada una.

La juez de instancia, después de realizar una minuciosa valoración de los medios de convicción obrantes en el plenario, y de concatenar el dictamen rendido dentro del trámite con el resto de valoraciones aportadas, concluyó que el de la IPS universitaria no tenía la fuerza probatoria suficiente para desvirtuar o señalar errores que lleven a establecer una PCL superior al 50%, como lo pretende la parte actora, más aun cuando en el mismo se valora el diagnóstico de osteoartrosis primaria generalizada, solo bajo el supuesto de haberse consignado una anotación en la historia clínica, lo que atendiendo lo establecido por el MUCI, es insuficiente para configurar una patología, adicional a que presenta yerros relevantes en relación con la consolidación de la PCL, estableciendo que no existían razones para declarar la nulidad de los dictámenes, resultando coherente con el método científico que se debe aplicar, la ponderación de la historia clínica y siendo una entidad competente para rendirla, la experticia de la Facultad de Salud Pública.

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte actora **interpuso recurso de apelación**, solicitando con ello su revocatoria y el consecuente reconocimiento del derecho, argumentando que, atendiendo la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el dictamen no se encuentra sometido a tarifa legal, contando el operador judicial con facultades probatorias para someter las experticias a un examen crítico, el cual, se debe efectuar para el caso, y con ello acogerse el allegado con la demanda y proceder al otorgamiento de la pensión, al haber considerado la patología de osteoartrosis al estar

sustentada en la historia clínica y no requerirse para su evaluación criterio de reumatología, resultando coherente su clasificación en la tabla 14.15, así como también el puntaje dado al rol laboral. En caso de no ser considerado dicho medio de convicción, insta para que se ajuste el elemento del rol laboral en un 20%, lo cual, es suficiente para ser declarado invalido.

Durante la oportunidad para presentar **alegatos**, Colpensiones expresó su opinión con respecto a la calificación de la pérdida de capacidad laboral del demandante. Según la entidad, aunque la IPS de la Universidad de Antioquia calificó la pérdida en un 54.79% de origen común, el Juzgado ordenó un nuevo dictamen realizado por la Facultad de Salud Pública de la misma universidad, que estableció una pérdida del 47.64% de origen común, lo cual evidencio que el aportado con la demanda no cuenta con mayor fundamentación técnica y científica.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados en los autos, no discutidos y que se tornan relevantes para resolver se tienen: que el señor Aurelio Álvarez fue calificado por Colpensiones el **25 de octubre de 2017**, con una **pérdida de capacidad laboral del 30,96% estructurada el 06 de octubre de 2017**, valorándose las deficiencias de otros trastornos especificados de los discos intervertebrales, cervicalgia, lumbago con ciática, hipoacusia neurosensorial bilateral, decisión frente a la cual se mostró en desacuerdo y, por ello, el 26 de febrero de 2018, fue valorado por la **Junta Regional de Calificación de Invalidez**, quien le determinó una **PCL del 47,05% estructurada el 06 de octubre de 2017**, por los diagnósticos cervicalgia, ciática, hipoacusia neurosensorial bilateral y otros trastornos especificados de los discos, dictamen que fue objeto de apelación y al ser

conocido por la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 19 de diciembre de 2018, decidió confirmar el atacado.** Al trámite se allegó **experticia del 26 de enero de 2019, emitida por la IPS Universitaria,** quien estableció que el demandante presenta una **PCL del 54,79% estructurada el 07 de febrero de 2018,** por los diagnósticos de: artrosis primaria generalizada, cervicalgia, ciática, hipoacusia neurosensorial, bilateral, y, otros trastornos especificados de los discos intervertebrales. De manera oficiosa el juzgado de conocimiento dispuso la valoración del actor, por parte de la **Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia,** entidad que el 18 de abril de 2022, **estableció que el señor Aurelio presenta una PCL del 47,64% estructurada el 05 de enero de 2022, con una deficiencia global ponderada del 23,14%.** Considerándose como diagnósticos: hipoacusia neurosensorial bilateral, cervicalgia, ciática, otros trastornos de los discos intervertebrales, hipertensión Esencial y, diabetes Mellitus no insulino dependiente. En auto del 02 de marzo del año en curso, la Sala decretó como prueba de oficio la valoración integral del señor Aurelio por parte del **CES,** y se le impuso la obligación de cubrir los gastos del mencionado experticio, so pena de seguirse con el trámite del recurso, manifestando a través de memorial que no cuenta con recursos para sufragar dichos costos.

Conforme a lo anterior, **el problema jurídico** se circunscribe a establecer la eficacia probatoria del dictamen aportado con la demanda, respecto a los practicados por Colpensiones, la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez y el ordenado de manera oficiosa por el juzgado de conocimiento, a fin de determinar si al demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Pues bien, debe decirse que la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-873 de 2013 ha considerado la calificación de la pérdida de

capacidad laboral como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común.

Así, atendiendo la Jurisprudencia Constitucional, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino también, de patologías que resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

De la misma manera dicha corporación ha establecido reglas procedimentales básicas que rigen las actuaciones de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral, y que conforman los contenidos mínimos del derecho fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellas: *"ii) **La valoración del estado de salud de la persona calificada debe ser completa e integral**, pues las juntas deberán proceder a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen **deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente**"* (sentencias T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de establecer, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad

laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante lo señalado en esta disposición legal, ninguna duda queda que tales dictámenes pueden ser debatidos judicialmente, en tanto, es posible que dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar, por cualquier medio probatorio, los errores en que pudo haber incurrido una pericia, atendiendo que, en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley (SL, 19 oct. 2006, rad. 29622, SL, 27 mar. 2007, rad. 27528, SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, SL, 30 abr. 2013, rad. 44653, SL16374-2015, CSJ SL5280-2018, SL4571-2019, SL1958-2021 y SL5694-2021). De acuerdo con ello, las partes tienen libertad probatoria, pudiendo demostrar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba.

Esta controversia es posible, por cuanto dichas experticias *"no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada"*, dado que ello solo ocurre con el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que *"implica el desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final -la sentencia-, llamado a definir el punto controvertido con fuerza de verdad legal"* (SL1958-2021), por lo que para el caso sería una entidad diferente a la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez al haberse presentado inconformidad por parte del demandante frente a los dictámenes rendidos por las misma, la encargada de determinar la pérdida de capacidad laboral, pues así fue previsto por el propio legislador, siendo estos dictámenes los medios de convicción idóneos para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, *ítems* que, en principio se tienen como invariables, no por el hecho de que tales aspectos exijan una determinada solemnidad, que desde luego no la tienen, sino porque establecerlos requiere de unos conocimientos técnicos y científicos de los que carece el operador judicial,

razón por la cual el legislador, se insiste, los difirió a organismos especializados en el tema.

Sobre la revisión de la pérdida de capacidad laboral, atendiendo a que la invalidez es un criterio susceptible de progresividad o regresividad, pues con él se pretende determinar si una persona está o no materialmente en situación de invalidez, se ha pronunciado el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, indicando en la SL3008-2022, que:

"es absolutamente factible que, dada la evolución de las patologías, la aparición de nuevos diagnósticos de un mismo origen o de una génesis diversa, pueda no solo determinarse en forma inicial un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino también revisarse en el sistema de seguridad social o por vía judicial una calificación que ya está en firme o realizarse una calificación integral que incluya factores comunes y laborales, con el fin de dictaminar la situación material de invalidez de una persona, lo anterior, con las características propias que supone cada uno de estos trámites de calificación."

Teniéndose establecido por la jurisprudencia especializada que cuando se controvierte un dictámen, el operador judicial está sujeto a tomar en su integridad el que de manera objetiva le de mayor credibilidad y certeza sobre los puntos debatidos, sin que pueda configurar uno propio a su acomodo, tomando datos de uno y otro, y dado que, la juez de instancia atendiendo las consideraciones del caso, procedió a decretar prueba de oficio, para la calificación integral del demandante, siendo rendida por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien como ya se dijo en experticia **estableció que el señor Aurelio presenta una PCL del 47,64% estructurada el 05 de enero de 2022, con una deficiencia global ponderada del 23,14%.** Valorándose los diagnósticos de hipoacusia neurosensorial bilateral, cervicalgia, Ciática, otros trastornos de los discos intervertebrales, hipertensión Esencial y, diabetes Mellitus no insulino dependiente. Teniendo en cuenta para ello, todos los diagnósticos que tenían el debido soporte, siendo baremados de

acuerdo a la norma, dejándose consignado como conclusión frente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que:

Establecidos los diagnósticos se procedió a valorarlos en los diferentes capítulos y tablas (que se citan en el informe) de acuerdo a criterios clínicos del examen físico, evaluaciones por especialistas y resultados de pruebas objetivas. Los porcentajes de cada diagnóstico fueron ordenados de mayor a menor y sumados mediante la fórmula de suma combinada (Balthazar) $A+(100-A) \times B/100 \times 0.5$ como lo indica el manual (Decreto 1507 de 2014). Después de esto se obtiene el porcentaje de Deficiencia (23,14%) Para la valoración del rol laboral (19,5%) y otras áreas ocupacionales (5,0%), se siguen los criterios de los capítulos Segundo y Tercero del citado Decreto, donde se valoran las limitaciones del paciente teniendo en cuenta la volición, habituación y capacidad de ejecución de acuerdo a los componentes biológico, psíquico y social de la persona con respecto a su ambiente. Total, PCL: 47,64 %.

En relación con la fecha de estructuración:

se entiende como la fecha en la que una persona pierde un grado o porcentaje de pérdida laboral u ocupacional de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad, cirugía o accidente y que se determina con base en la evaluación de las secuelas que estos han dejado.

En ningún de estos casos es factible y menos aún válido pretender que la fecha de estructuración se remonte al momento del diagnóstico ni del procedimiento quirúrgico, pues la característica propia de las enfermedades es precisamente su progresión y/o mejoría. Por ello exige la normatividad (Decreto 1507/2014) que la determinación debe hacerse a partir de un registro concreto en la historia clínica.

Para el caso concreto se define el 5/01/2022, fecha de última evaluación por Medicina Interna quien de acuerdo a resultado de laboratorio allí reportados, define el estado más actual de las patologías aquí baremadas acorde a la norma.

Y frente al origen:

Después de revisado el historial, se encuentra que los hallazgos imagenológicos de columna lumbar son signos de patología degenerativa crónica que no se pueden adecuar a estímulos de exposición laboral, ni a los presuntos accidentes de trabajo, ya que no logra determinar factores de riesgo como el tiempo de exposición al factor ergonómico dentro de la labor (RELACIÓN O SECUENCIA TEMPORAL), el nivel de peso, carga, intensidad y postura (GRADIENTE BIOLÓGICO). Condiciones necesarias para definir si estos son suficientes para el desarrollo de las lesiones analizadas. Criterio indispensable para poder identificar factores de riesgo ocupacional que se puedan adecuar a los descritos en el Decreto 1477 de 2014 (Tabla de enfermedades laborales).

Se tiene que, esta calificación se encuentra acorde a las deficiencias baremadas, ofreciendo plena credibilidad a la Sala, y que en lugar de desvirtuar confirma las atacadas, realizadas por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, quienes establecieron que el mismo cuenta con una PCL del 47,05%, distando de este en tan solo un 0,59%, sin que sea posible modificar ninguno de los aspectos, no solo por carecer los juzgadores de los conocimientos técnicos para hacerlo, sino porque la jurisprudencia especializada es clara en indicar que:

*si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, **pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros**, así se explica en sentencia SL1021–2019 radicado 62309 del 27 de marzo de 2019*

Así las cosas, al ser el medio de convicción anotado el idóneo para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, al haber sido emitido por organismo especializado en el tema y autorizado por el legislador y, convalidar el experticio rendido por las entidades facultadas por la ley para rendir los mismos, esto es las Juntas, se tienen las experticias objeto de revisión como invariables, pues, dichos conocimientos técnicos y científicos tienen que ser refutados por un medio igual, al carecer el operador judicial de ellos (ver sentencia SL1021-2019), y al desvirtuar estos las conclusiones del dictamen de parte, de manera objetiva y atendiendo los diagnósticos, historias y valoración del actor, y lo procedente es confirmar la decisión de instancia.

Costas en esta instancia a cargo del demandante y en favor de las demandadas. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$600.000,00, dividida en partes iguales para cada una de las demandadas.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **Confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por el señor **Eurelio de Jesús Álvarez Montoya**, contra **Colpensiones y la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez**.

Costas en esta instancia a cargo del demandante y en favor de las demandadas. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$200.000,00, dividida en partes iguales para cada una de las demandadas.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.


Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO